

Medellín, 4 de junio de 2019

Honorable Magistrados  
Corte Constitucional  
E. S. D.

Ref. Demanda de Inconstitucionalidad

En copia



Ignacio Sanín Bernal

Centro de Estudios  
Empresariales  
**CEEISB**



**JUAN ESTEBAN SANÍN GÓMEZ**, ciudadano colombiano en ejercicio, mayor de edad y vecino de Medellín, en mi calidad de Presidente del Centro de Estudios Empresariales Ignacio Sanín Bernal (CEEISB), actuando de conformidad con lo establecido en el artículo 241 n. 4 de la Constitución Nacional, interpongo demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 130 Ley 1955 de 2019.

**1. NORMA DEMANDADA (completa):**

Ley 1955 de 2019

"Artículo 130. Contribución especial para laudos arbitrales de contenido económico. Créase la contribución especial para laudos arbitrales de contenido económico a cargo de la persona natural o jurídica o el patrimonio autónomo a cuyo favor se ordene el pago de valor superior a setenta y tres (73) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estos recursos se destinarán a la financiación del sector Justicia y de la Rama Judicial. Serán sujetos activos de la contribución especial, el Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien haga sus veces, con destino al Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia. La contribución especial se causa cuando se haga el pago voluntario o por ejecución forzosa del correspondiente laudo. La base gravable de la contribución especial será el valor total de los pagos ordenados en el correspondiente laudo, providencia o sentencia condenatoria. La tarifa será el dos por ciento (2%). En todo caso, el valor a pagar por concepto del impuesto no podrá exceder de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La entidad pagadora, ya sea persona natural o entidad pública o privada, en el momento en que efectúe pagos totales o parciales de las cuantías ordenadas en el laudo arbitral, deberá retener en la fuente la totalidad de la contribución especial causada con el respectivo pago. La retención practicada deberá ser incluida y pagada en la respectiva declaración mensual de retenciones en la fuente del agente retenedor, de acuerdo con las normas que regulan la retención en la fuente contenidas en el Estatuto Tributario. En el evento de que el pagador no tenga la calidad de agente retenedor, el perceptor del pago deberá autorretener el monto de la contribución especial causada de acuerdo con las disposiciones



establecidas sobre el particular en el Estatuto Tributario. Esta contribución no aplica para laudos arbitrales internacionales.

Parágrafo. El Gobierno nacional deberá girar en la primera quincena de cada semestre al Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia, el monto recaudado por concepto de la contribución especial para laudos arbitrales de contenido económico".

## 2. NORMAS CONSTITUCIONALES TRANSGREDIDAS:

La norma demandada transgrede tres grupos de normas constitucionales, a saber:

- Primer Cargo (vicios formales de inconstitucionalidad):

Violación al principio de consecutividad e identidad flexible, aplicables al trámite de los proyectos de ley (Art. 157 y 160 de la Constitución Política).

- Segundo Cargo (vicios sustanciales de inconstitucionalidad):

Violación al preámbulo de la constitución (artículo 1), el acceso a la justicia (artículo 229 de la Constitución), el debido proceso (artículo 29), los principios de equidad, justicia tributaria y progresividad (artículos 363 y 95 numeral 9) y el principio de igualdad (artículo 13 de la Constitución).

- Tercer Cargo (violación al principio de unidad de materia):

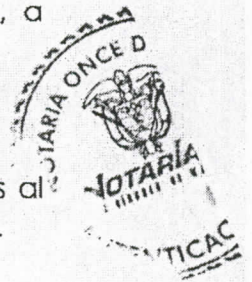
Violación al principio de unidad de materia establecido en el artículo 158 de la Constitución Política, según el cual, **"todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. El presidente de la respectiva comisión rechazará las iniciativas que no avengan con ese precepto, pero sus decisiones serán apelables ante la misma comisión..."** (Énfasis fuera de texto).

### 1.2. DESARROLLO DE LA VULNERACIÓN DE LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES INFRINGIDAS:

- Primer Cargo (vicios formales de inconstitucionalidad):

En Sentencia C- 084 de 2019, por medio de la cual se declaró inexecutable la contribución especial para laudos arbitrales incorporada en el artículo 364 de la ley 1819 de 2016, la Corte Constitucional definió los principios de consecutividad e identidad flexible, así:

"El artículo 157 de la Constitución establece la regla básica del trámite de los proyectos de ley. Prevé que ningún proyecto será ley sin (i) haber sido



W



publicado oficialmente por el Congreso, antes de darle curso en la comisión respectiva, (ii) haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente comisión permanente de cada Cámara, sin perjuicio de los casos en los cuales el primer debate pueda surtirse en sesión conjunta de las comisiones permanentes de ambas cámaras, conforme se prevea en el Reglamento del Congreso, (iii) haber sido aprobado en cada Cámara en segundo debate, y (iv) haber obtenido la sanción del Gobierno. Esta exigencia es conocida como el principio de consecutividad en el procedimiento de formación de la Ley.

Estrechamente vinculado a la norma anterior, el artículo 160 de la Constitución consagra la posibilidad de que durante el segundo debate cada Cámara introduzca a los proyectos de ley las modificaciones, adiciones o supresiones que juzgue necesarias. En consecuencia, al mismo tiempo que cada iniciativa debe ser aprobada en la respectiva comisión y en la plenaria de cada Cámara, también se concede la potestad de introducir en segundo debate modificaciones, adiciones o supresiones a los textos aprobados en el primer debate, ya sea que este se haya surtido a través de sesión conjunta de las comisiones o en la comisión constitucional permanente de la cámara correspondiente. Esta posibilidad de incorporar cambios a un proyecto de ley en una instancia posterior al primer debate, leída a la luz del artículo 157 de la C.P., ha dado lugar al denominado principio de identidad flexible.

El principio de consecutividad implica una obligación con varias modalidades. Comporta para las comisiones y las plenarios de las cámaras legislativas el deber de estudiar y debatir todos los temas que hayan sido puestos a su consideración. Se trata de una competencia y un deber constitucional no susceptible de ser trasladado a otro órgano del Estado ni al que tampoco pueden renunciar. Por lo tanto, la totalidad del articulado propuesto en la ponencia presentada debe ser discutido y votado por la comisión constitucional permanente o por la plenaria, según sea el caso. En el mismo sentido, las proposiciones que se planteen en el curso del debate deben ser objeto de discusión y votación, salvo que el autor de la propuesta decida retirarla antes de ser sometida a votación o a modificaciones (Art. 111 de la Ley 5ª de 1992)".

La Corte Constitucional, al analizar la exequibilidad del artículo 364 de la Ley 1819 de 2016 (contribución especial para laudos arbitrales establecida en la Ley 1819 de 2016) estableció que:



11





"A juicio de la Corte, la contribución especial para laudos arbitrales de contenido económico, sancionada como artículo 364 de la Ley 1819 de 2016, fue incorporada en segundo debate del trámite legislativo desconociendo de los principios de consecutividad e identidad flexible. La Sala encuentra que les asiste razón al demandante y a la gran mayoría de intervinientes. El artículo discutido no fue objeto de deliberación y votación en primer debate y, si bien guarda relación con los temas discutidos y votados en esa instancia legislativa, es una materia de regulación autónoma y separable, sobre la cual no se ocuparon las comisiones conjuntas de Senado y Cámara".

(...)

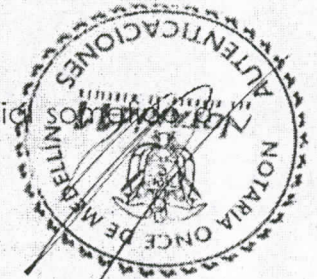
"La Corte entonces abordó el problema de si una norma que crea una contribución especial a cargo de un grupo de usuarios de la justicia arbitral, introducida en segundo debate del trámite legislativo, desconoce los principios de consecutividad e identidad flexible, en aquellos supuestos en los cuales la correspondiente proposición formulada en primer debate, no ha sido objeto de discusión y votación. Al resolver el cargo, la Sala encontró que la regla sobre la contribución especial para laudos arbitrales de contenido económico, como lo exige el artículo 157 de la C.P, no había sido objeto de deliberación y votación en primer debate y, si bien guarda relación con las materias discutidas y votadas en esa instancia legislativa, es una materia de regulación autónoma y separable, sobre la cual no se ocuparon las comisiones conjuntas de Senado y Cámara". (Corte Constitucional, Sentencia C- 084 de 2019, M.P. Dra. Diana Fajardo Rivera, Demandante: Dr. Juan Pablo Cárdenas).

Visto esto, debe indicarse que en el proyecto de ley inicial de lo que hoy es la ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022) sometido a debate no se incluyó el artículo que crea la contribución especial para laudos arbitrales. Este artículo fue apenas incorporado al texto del proyecto de ley para discusión en el segundo debate, razón por la cual su trámite –al igual que sucedió con la contribución especial para laudos arbitrales incorporada en la ley 1819 de 2016- está viciado de inconstitucionalidad por violar el principio constitucional de consecutividad e identidad flexible.

Para efectos de acreditar lo anterior, se adjunta a la presente un CD con el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo sometido a primer debate y con el texto sometido a segundo debate. Nótese que el artículo que crea la contribución especial arbitral está contenido en el artículo 137 del proyecto de



ley para discusión en segundo debate y no existe en el texto iniciado en el primer debate.



• **Segundo Cargo (vicios sustanciales de inconstitucionalidad):**

La norma contenida por el enunciado normativo transcrito en el numeral anterior (artículo 130 de la Ley 1955 de 2018) vulnera principalmente el preámbulo de la constitución (artículo 1), el acceso a la justicia (artículo 229 de la Constitución) y el debido proceso (artículo 29), al igual que los principios de equidad, justicia tributaria y progresividad (artículos 363 y 95 numeral 9) y el principio de igualdad (artículo 13 de la Constitución).

A continuación, transcripción de la normativa infringida:

**"Artículo 1.** El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente (...)" [Negrilla y subraya propias].

**"Artículo 229.** Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado."

**"Artículo 95.** La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades.

Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes.

Son deberes de la persona y del ciudadano:

(...)

9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad" [Negrilla y subraya propias].

**"Artículo 13.** Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica (...)"





**1. La norma demandada desestimula el acceso a Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos:**

La Constitución Política ha favorecido siempre los mecanismos alternativos de solución de controversias como un dispositivo de acceso a la justicia. Es así como el artículo 116 de la Carta Política indica que "los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley".

Adicionalmente, en sentencia C-222 de 2013, la Corte Constitucional se pronunció al respecto diciendo:

*"Tanto para la protección de los derechos, como para la solución de conflictos, el derecho a acceder a la justicia exige en todas y cada una de las etapas del proceso que la actividad de justicia esté orientada a facilitar la solución pacífica de los conflictos y asegurar de manera efectiva el goce de los derechos. Y esta regla se aplica tanto a la justicia formal, como a los mecanismos alternativos de solución pacífica de conflictos"*  
[Negrilla y subraya propias].

Al gravar los laudos arbitrales de contenido económico con la contribución establecida en la norma demandada, se desestimula gravemente el uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC). El arbitraje, por sí mismo, implica costos de transacción superiores a los que implica tramitar un proceso ante la jurisdicción ordinaria. El aumento de dichos costos de transacción, a través del gravamen denunciado, implica desestimular el acceso a dicho mecanismo, en contravía de la marcada línea de la Constitución a favor de los MASC.

**2. La norma demandada viola los principios de justicia y equidad tributarias (art. 95, numeral 9 de la Constitución) y el de progresividad**

Al establecer la norma que la "base gravable de la contribución especial será el valor total de los pagos ordenados en el correspondiente laudo, providencia o sentencia condenatoria" se generan los siguientes efectos, los cuales lesionan gravemente los principios aludidos:

- a. Al recaer la contribución atacada sobre el componente de "daño emergente" establecido en el laudo arbitral, se está gravando al usuario de las Masc sobre un rubro que -lejos de enriquecerlo-, tiene como objeto restablecer su patrimonio, en atención a la naturaleza indemnizatoria de dicho rubro.
- b. Al recaer la contribución atacada sobre el componente "costas" y "agencias en derecho", se estaría gravando un reembolso de gastos, pues





ello equivale a lo que la parte tuvo que invertir para hacer valer sus derechos (tanto en expensas procesales, como en costos de apogador).

- c. Al recaer la contribución sobre el ítem sanciones procesales, tales como sanciones por exceso de estimación de pretensiones respecto del juramento estimatorio, sanciones por inasistencia a audiencias, entre otras, se estaría vulnerando la obligación de contribuir a los gastos y expensas del Estado bajo los conceptos de justicia y equidad, por cuanto se estaría gravando doblemente al contribuyente por un rubro que ya, de por sí, se paga a favor del Estado.
- d. Al recaer la contribución sobre el ítem "lucro cesante", se estarían vulnerando los principios de equidad y justicia tributaria, por cuanto tal rubro, en tanto ingreso susceptible de aumentar el patrimonio del contribuyente, ya estaría siendo gravado con el impuesto sobre la renta, razón por la cual es inequitativo gravarlo con otro tributo, sin que exista otra causa que la sola percepción del ingreso.

**3. La norma demandada viola el principio de gratuidad de la justicia subyacente a los artículos 1 y 229 de la Constitución**

El artículo primero de la Constitución establece lo siguiente:

*"Artículo 1. El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente [...]"*

Por su parte, el artículo 229 establece lo que sigue: "Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado".

De los artículos 1 y 229 de la Constitución se desprende el principio de gratuidad de la justicia, en tanto los administrados tienen garantizado el derecho de acceder a la administración de justicia, sin ninguna limitación.

A propósito de este punto, la Corte Constitucional, en sentencia T – 522 de 1994, dispuso lo siguiente:

*"De la Constitución se puede inferir el principio de gratuidad de la circunstancia de que la justicia constituye uno de los pilares o fundamentos esenciales para lograr la convivencia, la paz y un orden justo que haga realidad la igualdad jurídica y material, enmarcado dentro de la filosofía y el realismo del Estado Social*





de Derecho, justicia cuya aplicación, operatividad y eficacia se hace efectiva cuando las instituciones procesales creadas como instrumentos para asegurar su vigencia, arbitran los mecanismos idóneos para que puedan acceder a ellas todas las personas en condiciones de igualdad. La gratuidad es, en esencia, la condición para hacer realidad el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, pues la situación económica de las partes no puede colocar a una de ellas en situación de privilegio frente a la otra ni propiciar, por consiguiente, la discriminación" [Negrilla y subraya propias].

En tanto la normativa demandada ordena el pago de una prestación económica con ocasión de la administración de justicia arbitral, dicha disposición va en contravía del principio de gratuidad de la administración de justicia y, por lo tanto, incurre en violación de los artículos 1 y 229 de la Constitución, en tanto normas de los que la Corte Constitucional ha derivado tal principio.

**4. La norma contenida por el artículo 130 de la Ley 1955 de 2019 viola lo dispuesto por los artículos 13, 363 y 95-9 en materia de principios de igualdad, equidad, justicia tributaria y progresividad:**

El principio de igualdad irradia todo el ordenamiento jurídico colombiano y tiene una manifestación particular en asuntos tributarios, a través de los principios de equidad y justicia tributaria, mismos que fungen como límite del deber de tributar que recae sobre los administrados.

Sobre el particular, dispone lo siguiente la Constitución a través del artículo 95, numeral 9:

**"Artículo 95.** La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades.

Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes.

Son deberes de la persona y del ciudadano:

(...)

9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad"

En el mismo sentido, el artículo 363 de la Constitución Política establece que:

**"Artículo 363.** El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad (...)"



La Corte Constitucional colombiana, a través de la sentencia C - 657 de 2015, con ponencia del doctor Jorge Iván Palacio Palacio, aludió a los elementos que integran los conceptos de justicia y equidad tributarias en los siguientes términos:

"[...]el principio de equidad tributaria puede ser analizado desde varias perspectivas. En primer lugar, exige tener en cuenta la capacidad real de pago del contribuyente; en segundo lugar, implica que los tributos deben ser regulados de modo que dos sujetos o grupos de sujetos que se hallen en iguales condiciones reciban el mismo tratamiento fiscal, a menos que existan razones que justifiquen no hacerlo; y en tercer lugar, la equidad significa que ningún gravamen puede tener implicaciones confiscatorias, lo cual ocurre 'cuando la actividad económica del particular se destina exclusivamente al pago del mismo, de forma que no existe ganancia'

(...)

La equidad tiene una dimensión vertical y una horizontal. Según la primera, la equidad se funda en un criterio material que exige valorar las condiciones del sujeto y el hecho generador para asegurar que las reglas tributarias no impongan cargas desproporcionadas a los contribuyentes, ni se les excluya sin justa causa de una obligación que les corresponde asumir. En su dimensión horizontal, los contribuyentes que se encuentren en una misma situación fáctica deben recibir el mismo tratamiento fiscal, de manera que una regulación más favorable no puede dejar de lado a quienes se hallen en las mismas circunstancias de hecho, a menos que existan razones -económicas, sociales o de política tributaria- que así lo justifiquen; en otras palabras, 'exige que fenómenos económicos similares le sean imponible las mismas obligaciones fiscales', salvo que se evidencie la necesidad de cumplir con un fin constitucionalmente valioso que exija un trato distinto" [Negrilla y subraya propias].

La equidad tributaria busca, entre otras cosas, evitar tratamientos desiguales para un grupo de sujetos que posea las mismas condiciones que otro, es decir, deben recibir el mismo tratamiento fiscal, por lo que se requiere una valoración y causa justa en la carga tributaria a imponer, cosa ignorada en la norma demandada, pues la misma crea un tratamiento desigual para un grupo de usuarios sin tener una causa justa para diferenciarlos del resto.

La disposición demandada distingue entre dos grupos de sujetos: 1. Quienes acuden a la jurisdicción ordinaria y quienes acuden al arbitramento; 2. Dentro de quienes acuden al arbitramento, entre quienes obtienen laudos con prestaciones superiores a 73 SMLMV y quienes obtienen laudos por debajo de dicho monto.

Al revisar la norma atacada surgen preguntas en relación con la equidad y justicia tributaria, ¿Cuál es la diferencia entre la justicia arbitral y la justicia ordinaria, si ambos buscan y tienen por finalidad perseguir pretensiones



económicas? ¿Cómo dicha diferencia puede ser razón suficiente para la imposición de este tributo diferencial? ¿Qué diferenciación existe al obtener una sentencia favorable en la justicia ordinaria por valor superior a setenta y tres (73) salarios mínimos legales mensuales vigentes, con la obtención de un laudo arbitral positivo de la misma cuantía?

En concepto nuestro, no hay ninguna diferencia jurídica relevante entre las situaciones referidas y, por lo tanto, no hay ninguna razón que justifique la imposición del tributo que venimos estudiando.

Evidentemente, desde un punto de vista material, no hay una diferencia razonable que justifique gravar a quienes acuden a la justicia arbitral con un tributo que se cause por la administración de justicia. El legislador en este punto hizo una discriminación injustificada o que, en todo caso, le corresponde justificar toda vez que es sospechosa.

Ahora, viendo que el gravamen se causa con la administración de justicia arbitral, bien valdría la pena preguntarse sobre la naturaleza jurídica del mismo, ¿es, en efecto, una contribución o se compadece mejor con la naturaleza de una tasa?

De tratarse materialmente de una tasa, su inconstitucionalidad se impone, sin ninguna otra consideración, puesto que no es admisible que el legislador exija el pago de una prestación (tasa) como contraprestación por la ejecución de la función jurisdiccional. Sin que esto quiera decir que la disposición sería exequible de tratarse de una contribución, pues, según veremos, partiendo de esa base también hay dudas razonables sobre su constitucionalidad.

En nuestro concepto, el hecho de que este gravamen se cause con la administración de justicia arbitral implica que sea una tasa y no una contribución, toda vez que no tiene un carácter general o sectorial, ni implica la contraprestación por la obtención de un beneficio que otros no puedan obtener (contribución), sino que grava a quienes opten por acudir a la justicia arbitral (tasa).

Siendo una tasa, la misma resulta sospechosa desde el punto de vista de la justicia, la equidad y la igualdad: ¿cómo su tarifa puede fijarse por vía de una norma general de carácter legislativo? ¿Atendiendo a qué criterio técnico? ¿Cómo implica recuperación de un costo? ¿Qué diferencia hace, para tales efectos, el hecho de que el valor pecuniario reconocido sea superior a 73 salarios mínimos?

Incluso tratándose de una contribución especial, la misma resulta sospechosa desde el punto de vista de la justicia, la equidad y la igualdad: ¿cuál es el beneficio en virtud del cual se paga la contribución? ¿Cuál es su destinación sectorial o, mejor dicho, su destinación a la Rama Judicial qué beneficio puede implicar para quién lo paga, bajo el entendido de que su litigio ya fue resuelto? ¿Acaso dicho beneficio no redundaría en interés de todos los colombianos, incluidos





quienes no pagan la supuesta contribución especial? ¿Esta última hipótesis implica la sanción legal de un desequilibrio de las cargas públicas?

Por otro lado, al establecer la norma que la "base gravable de la contribución especial será el **valor total** de los pagos ordenados en el correspondiente laudo, providencia o sentencia condenatoria", consideran los suscritos que se vulnera el principio de progresividad, por cuanto el hecho generador de la contribución deviene de una favorabilidad en las pretensiones de un determinado proceso que, se entiende satisfecho en razón al perjuicio, incumplimiento o responsabilidad contractual, que para nada enriquecen al supuesto contribuyente, máxime cuando ya está siendo gravado con otra especie de tributo como lo es la renta o ganancia ocasional que debe reconocerse por la suma entregada en juicio. Esto equivaldría, en la práctica a gravar doblemente un mismo hecho, situación que riñe frontalmente contra los principios de equidad y justicia que rigen nuestro ordenamiento tributario.

Los laudos arbitrales son declarativos y no constitutivos del derecho. Es decir, el derecho previamente existía y el laudo sólo lo reconoce para hacerlo exigible. Por ello, estrictamente, no hay ingreso, pues el derecho ya existía dentro del patrimonio del contribuyente y cómo ya existía, ya debió haber tributado de alguna manera por lo que gravarlo nuevamente implica la existencia necesaria de una doble tributación sobre un mismo hecho.

En Sentencia C-169 de 2014, por medio de la cual se declaró inexecutable el arancel judicial, estableció la Corte Constitucional que:

*"El arancel judicial introduce un sacrificio en el principio de equidad por tres razones [...]. Uno, porque el valor o monto a pagar por concepto de arancel no se determina con arreglo a criterios que consulten la capacidad de pago, y por lo mismo la cuantía de la detracción podría incluso ser superior a la capacidad de pago del contribuyente. Dos, debido a que, eso mismo, puede considerarse como una falta de previsión de garantías tributarias contra la confiscación. Tres, porque puede convertirse en una exacción desigual para sujetos con la misma capacidad de pago. Los elementos del arancel judicial suponen una franca restricción al principio de equidad (CP arts 95-9 y 363), en la medida en que gravan una realidad que no consulta la capacidad de pago del contribuyente, no establecen dispositivos para evitar escenarios confiscatorios, e introducen un trato desigual e injustificado entre sujetos con la misma capacidad contributiva, y en iguales circunstancias fácticas".*

Dado lo anterior, es claramente visible la inconstitucionalidad por transgredir los principios constitucionales de equidad, justicia y progresividad tributaria, ya que es evidente que dicha carga discrimina a un grupo de usuarios sin ninguna justificación, gravándolos sin consideración a situaciones económicas, sociales o culturales y restándole a las MASC la naturaleza jurídica con la que fueron creadas, debido a que muy posiblemente los administrados dejarán de acudir a la justicia privada.





Debido a lo expuesto, el artículo 130 de la Ley 1955 de 2019 presenta vicio de inconstitucionalidad insubsanables pues claramente vulnera los principios tributarios y constitucionales de igualdad, equidad, justicia y progresividad al no tener una fundamentación constitucional que permita entender la diferenciación entre los distintos mecanismos de búsqueda de justicia.

- **Tercer Cargo: Violación al principio de unidad de materia.**

La norma atacada vulnera lo establecido en el artículo 158 de la Constitución Política según el cual **"Todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. El presidente de la respectiva comisión rechazará las iniciativas que no avengan con ese precepto, pero sus decisiones serán apelables ante la misma comisión..."** (Énfasis fuera de texto).

La disposición constitucional transcrita, encuentra desarrollo en el artículo 148 de la Ley 5 de 1992, Reglamento del Congreso de la República, según el cual: **"Cuando un proyecto haya pasado al estudio de una Comisión Permanente, el presidente de la misma deberá rechazar las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con una misma materia. Sus decisiones serán apelables ante la Comisión"** (Énfasis fuera de texto). A su vez, el artículo 193 del mismo estatuto legal, en consonancia con el artículo 169 Constitucional, dispone que el título de las Leyes debe corresponder con su contenido.

Lo anterior tiene sustento en que la Ley 1955 de 2019 es una norma por medio de la cual **"se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 –Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad"** mientras que el artículo atacado no tiene conexidad alguna con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Por el contrario, la norma atacada simplemente crea –con vocación de permanencia- una contribución especial para laudos arbitrales, cosa que difiere sustancialmente de las medidas temporales (y transitorias) que han de financiar el Plan Nacional de Desarrollo de un gobierno.

Así las cosas, con relación al **Principio de Unidad de Materia** contenido en el artículo 158 Superior, ha dicho la Corte Constitucional en Sentencia C-501 de 2001, que:

**"... el Principio de Unidad de Materia tiene la virtualidad de concretar el principio democrático en el proceso legislativo pues garantiza una deliberación pública y transparente sobre temas conocidos desde el mismo surgimiento de la propuesta. Permite que la iniciativa, los debates y la aprobación de las leyes se atengan a unas materias predefinidas y que en esa dirección se canalicen las discusiones y los aportes previos a la**

h





promulgación de la ley. Esa conexión unitaria entre las materias que se someten al proceso legislativo garantiza que su producto sea el resultado de un sano debate democrático en el que los diversos puntos de regulación han sido objeto de conocimiento y discernimiento. Con ello se evita la aprobación de normas sobre materias que no hacen parte o no se relacionan con aquellas que fueron debatidas y se impide el acceso de grupos interesados en lograr normas no visibles en el proceso legislativo. De este modo, al propiciar un ejercicio transparente de la función legislativa, el principio de unidad de materia contribuye a afianzar la legitimidad de la instancia parlamentaria"

Al efecto, ha señalado la Corte Constitucional, en Sentencia C-597 de 1996, que:

*"[La] comprensión generosa de la unidad temática de una ley no es caprichosa, sino que es una concreción del peso del Principio Democrático en el ordenamiento colombiano y en la actividad legislativa. En efecto, si la regla de la unidad de materia pretende racionalizar el proceso legislativo y depurar el producto del mismo, al hacer más transparente la aprobación de las leyes y dar coherencia sistemática al ordenamiento, no es congruente interpretar esta exigencia constitucional de manera tal que se obstaculice indebidamente el desarrollo de la actividad legislativa. Por ello esta Corte ha señalado que solamente deben retirarse del ordenamiento jurídico 'aquellos apartes, segmentos o proposiciones respecto de los cuales, razonable y objetivamente, no sea posible establecer una relación de conexidad causal, teleológica, temática y sistémica con la materia dominante de la misma'".*

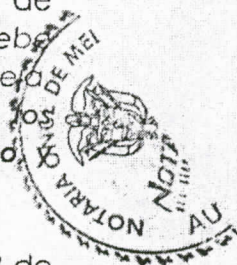
En tal virtud, el principio de unidad de materia genera implicaciones en el desenvolvimiento del proceso legislativo, ya que tiene efecto vinculante desde la primera etapa del proceso de expedición de la ley, y por eso se habilita al presidente para ejercer actos de control sobre los contenidos de las iniciativas, pues ellos deben estar identificados por el tratamiento de la materia que es objeto de regulación.<sup>1</sup>

La Corte Constitucional, en Sentencia C-837 de 2001, destaca que el principio de unidad de materia es en primer término un asunto de pertinencia legislativa, lo cual significa que por mandato constitucional el articulado de toda ley debe conformar un cuerpo normativo organizado de manera coherente y finalística, bajo el entendido de que debe hallarse referido a uno o varios temas que en su conjunto resulten claramente necesarios al tratamiento de actos, hechos o circunstancias que informan una materia del resorte del Congreso de la

<sup>1</sup> Corte Constitucional, Sentencia C-501/01 de mayo 15 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en las sentencias C-540/01 de mayo 22 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-778/01 de julio 25 de 2001, M.P. Jaime Araujo Rentería; C-995/01 de septiembre 19 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.



República. En el mismo sentido, la Corte Constitucional en Sentencia C-778 de 2003, señala que: "en virtud del principio de unidad de materia, cada ley debe regular una materia determinada, que puede ser compleja, en forma compleja **en forma tal que exista conexidad o vinculación objetiva y razonable entre los varios aspectos de su contenido, y por tanto exista coherencia en todo su texto, y no debe regular materias separadas**". (Énfasis fuera de texto).



Así pues, según lo ha interpretado la Corte Constitucional en Sentencia C-188 de 2006, "el principio de unidad de materia opera como un límite expreso al ejercicio del poder de configuración normativa de que es titular el Congreso de la República" y, por lo tanto, **su observancia le impone al legislador el cumplimiento de dos condiciones básicas:** "(i) definir con precisión desde el mismo título del proyecto cuáles serán las materias centrales que se van a desarrollar a lo largo del articulado, y (ii) mantener una estricta relación interna entre las normas que harán parte del texto de la ley, de manera que exista coherencia temática entre ellas y una clara correspondencia con la materia general de misma"

Cabe resaltar que la Corte Constitucional, en Sentencia C-992 de 2001, ha explicado que: "la unidad de materia no significa simplicidad temática, de tal manera que un proyecto solo pudiese referirse a un único tema", sino que, por el contrario, "un proyecto puede tener diversidad de contenidos temáticos, siempre y cuando entre los mismos exista una relación de conexidad objetiva y razonable", lo que significa que solo se desconoce el mencionado principio cuando "entre los distintos temas que hagan parte de un proyecto no sea posible encontrar una relación de conexidad, de manera que cada uno constituya una materia separada".

De otro lado, la Corte Constitucional, en Sentencia C-821 de 2006, señaló ciertos criterios concretos que deben presidir el escrutinio de las leyes acusadas de desconocer el artículo 169 superior, por incongruencia entre su título y su contenido. Conforme a tales criterios jurisprudencialmente decantados, para efectos de ejercer el control de constitucionalidad en estos supuestos, es imprescindible que el juez constitucional entre a determinar los siguientes aspectos:

"i) Que el título de la ley no contenga elementos discriminatorios, de aquellos enunciados por la propia Constitución como prohibidos para establecer diferenciaciones entre personas o sectores de la población. Así, por ejemplo, no puede contener alusiones discriminatorias basadas en la raza, el sexo, la religión, etc.

ii) Que el título de la ley no sustituya la descripción general del contenido de la misma. Se trata simplemente de dar una idea general sobre el contenido





temático del cuerpo normativo respectivo, sin que deba realizar descripción pormenorizada de los temas que pretende regular.

iii) Entre el título y el contenido de la ley debe existir, necesariamente, una relación de conexidad, como consecuencia del principio de unidad de materia (C.P., art. 158) y el principio de correspondencia entre el título de la ley y su contenido (C.P., art. 169).

iv) El título no debe conceder reconocimientos, privilegios u honores a una persona específica, pues para ello se encuentran las leyes de honores".

La Corte Constitucional, en la Sentencia C-400 de 2010, hizo expresa referencia al alcance de los distintos criterios de conexidad que permiten determinar el cumplimiento del principio de unidad de materia. En relación con la (i) **Conexidad temática**, explicó que la misma puede definirse "como la vinculación objetiva y razonable entre la materia o el asunto general sobre el que versa una ley y la materia o el asunto sobre el que versa concretamente una disposición suya en particular". En cuanto a la (ii) **Conexidad causal**, manifestó que ésta se refiere a la identidad que debe existir entre una ley y cada una de sus disposiciones, en cuanto a los motivos que dieron lugar a su expedición. Concretamente, la conexidad causal "hace relación a que las razones de la expedición de la ley sean las mismas que dan lugar a la consagración de cada uno de sus artículos en particular, dentro del contexto de la posible complejidad temática de la ley". Por su parte, frente a la (iii) **Conexidad teleológica**, dijo igualmente que ella también tiene que ver con "la identidad de objetivos perseguidos por la ley vista en su conjunto general, y cada una de sus disposiciones en particular". Esto significa que, en virtud de la conexidad teleológica, "la ley como unidad y cada una de sus disposiciones en particular deben dirigirse a alcanzar un mismo designio o designios, nuevamente dentro del contexto de la posible complejidad temática de la ley". Finalmente, respecto de la (iv) **Conexidad sistemática**, la misma fue entendida "como la relación existente entre todas y cada una de las disposiciones de una ley, que hace que ellas constituyan un cuerpo ordenado que responde a una racionalidad interna".

Para la generalidad de las leyes dicho criterio exige que entre la materia dominante de la ley y cada una de sus disposiciones exista una conexidad objetiva y razonable de naturaleza, temática, causal, teleológica, metodológica o sistemática (Corte Constitucional, Sentencia C-490 de 2011). En ese sentido "el vínculo o relación puede darse en función de (...) (i) el área de la realidad social que se ocupa de disciplinar la ley -conexión temática-; (ii) las causas que motivan su expedición -conexión causal-; (iii) las finalidades, propósitos o efectos que se pretende conseguir con la adopción de la ley -conexión teleológica-; (iv) las necesidades de técnica legislativa que justifiquen la incorporación de una determinada disposición -conexidad metodológica-; (v) los contenidos de todas y

h



cada una de las disposiciones de una ley, que hacen que ellas constituyan un cuerpo ordenado que responde a una racionalidad interna -conexión sistemática-" (Corte Constitucional, Sentencia C-896 de 2012).



Conforme a tal perspectiva, el juicio constitucional para establecer la violación del principio de unidad de materia se encuentra compuesto por dos etapas, de conformidad con lo dicho por la Corte Constitucional en Sentencia C-823 de 2006. En la primera de ellas se define "el alcance material o contenido temático de la ley parcialmente demandada" procediendo, seguidamente, a determinar si entre dicha materia y las disposiciones que se acusan o examinan existe alguno de tales vínculos.

En acertada síntesis, la Corte ha señalado que "la unidad de materia persigue dos finalidades: la coherencia y la transparencia del proceso legislativo". En cuanto a la coherencia, busca que "el proceso legislativo siga un hilo conductor que le dé sentido, dentro del contexto específico definido por el propio legislador, de tal suerte que no se distorsione al extenderse a materias aisladas o inconexas", manteniendo "un orden temático en el proceso de deliberación democrática, que es propio del Congreso, que permita un debate informado o serio". Tratándose de la transparencia, "la unidad de materia busca impedir que en el proceso legislativo se introduzcan, de manera súbita, sorpresiva, inopinada o subrepticia, e incluso anónima, iniciativas oportunistas que no guarden relación con él y sobre las cuales no se ha dado un verdadero debate" (Corte Constitucional, Sentencia C-830 de 2013).

Así pues, respecto de las implicaciones del principio de unidad de materia en el ámbito del control de constitucionalidad, la Corte Constitucional ha precisado que: "constituye un parámetro que habilita a cualquier ciudadano para plantear la expulsión del ordenamiento jurídico de las normas que lo han incumplido, que le impone la carga de identificar la materia de la ley y las normas que no se relacionan con ella y que le plantea al juez constitucional la necesidad de identificar los núcleos temáticos de la ley y la existencia o no de una relación de conexidad objetiva y razonable entre tales núcleos y las disposiciones cuya expulsión se pretende" (Corte Constitucional, Sentencia C-274 de 2013).

Adicionalmente, el artículo 339 de la Constitución Política, modificado por el acto legislativo 03 de 2011, del capítulo II -de los Planes de Desarrollo-, título XII, regula el Régimen Económico y de la Hacienda Pública, disponiendo que:

"Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y





ambiental que serán adoptadas por el Gobierno. El plan de inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución, dentro de un marco que garantice la sostenibilidad fiscal.

Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley. Los planes de las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones de mediano y corto plazo." (Énfasis fuera de texto).

De esta forma, el artículo 339 de la Constitución, ordena que exista un Plan Nacional de Desarrollo compuesto por dos partes claramente diferenciadas: la parte general y el plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la primera deben consagrarse (a) los propósitos y objetivos previstos para el largo plazo, (b) las metas y prioridades de la acción del Estado en el mediano plazo y (c) las estrategias y orientaciones generales en materia de política económica, social y ambiental. La segunda parte debe incluir (a) los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y (b) la especificación de los recursos financieros que demanda su ejecución<sup>2</sup>.

Ahora bien, la jurisprudencia de este Tribunal ha sostenido que la Ley del Plan no solo prevé, entre los instrumentos o estrategias que resultan necesarios para la consecución de las metas y objetivos del Plan "las referentes al cálculo de ingresos públicos proyectados y a la subsiguiente asignación de recursos fiscales con destino a la financiación de programas" sino que también incluye "normas jurídicas de cuyo cumplimiento se derive la consecución de las metas no sólo económicas, sino también sociales o ambientales que se ha estimado deseable alcanzar."<sup>3</sup> Tal conclusión encuentra fundamento en la prescripción contenida en

<sup>2</sup> Corte Constitucional, Sentencia C-016 del 27 de enero de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.

<sup>3</sup> Corte Constitucional, Sentencia C-305 de 2004. También en la misma dirección las sentencias C-191 de 1996 y C-394 de 2012. De manera particular, la sentencia C-376 de 2008 indicó: "En efecto, las estrategias para realizar las metas y prioridades de la acción estatal definidas en la parte general del Plan de Desarrollo no son solamente las de carácter eminentemente presupuestal, sino que ellas también pueden consistir en normas jurídicas cuyo alcance regulador favorezca la consecución de los objetivos que se pretende alcanzar. Por ejemplo, dentro de estas estrategias cabe contemplar medidas tributarias de fomento a ciertas actividades económicas que se juzgue necesario incentivar por razones de interés general, tales como exenciones u otro tipo de beneficios."



el numeral 3° del artículo 150 de la Carta conforme al cual le corresponde al Congreso aprobar la ley del plan determinando no solo los recursos y las apropiaciones sino también las medidas necesarias para impulsar el cumplimiento de los mismos.



Sin embargo, tal como indica la Corte Constitucional en Sentencia C-016 de 2016, la ley que aprueba los Planes Nacionales de Desarrollo, debe sujetarse a los límites aplicables a las demás leyes, y **"su aprobación no puede desconocer la prescripción establecida en el artículo 158 de la Carta y en el artículo 148 de la Ley 5 de 1992. Según tales normas todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella."** (Énfasis fuera de texto).

Al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido que en consideración al carácter multitemático de la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo, el principio de unidad de materia tiene un alcance diverso. De no ser así, dijo la Sentencia C-394 de 2012, *"la prohibición de incluir temas que no guarden relación con la materia regulada por la Ley del Plan podría quedar desprovista de significado debido precisamente a la multiplicidad de contenidos que este tipo de leyes trata, de manera tal que ninguna previsión legislativa sería extraña a un cuerpo normativo de esta naturaleza."*

Por lo anterior, y con relación al **alcance y fundamento de la unidad de materia en la ley del Plan Nacional de Desarrollo**, explicó la Corte en Sentencia C-016 de 2016, que deben tenerse en cuenta los siguientes enunciados:

- a) El principio de unidad de materia en la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo, impone la conexión o vínculo entre los objetivos o metas contenidos en la parte general del Plan y los instrumentos creados por el legislador para alcanzarlos. En consecuencia, **"el legislador no puede incluir cualquier tipo de normas en la ley del Plan, siendo indispensable que las medidas de naturaleza instrumental se encuentren en una relación de conexidad directa con los objetivos y metas del Plan. Si ello no ocurre o si la disposición no incorpora ningún mecanismo para la ejecución de una de las políticas del Plan, se producirá una infracción del artículo 158 de la Constitución Nacional"**. (Corte Constitucional, Sentencia C-016 de 2016 y Sentencia C-394 de 2012).

---

(...)" En la sentencia C-747 de 2012 preciso: "Y partiendo de que un "plan" consiste en la ordenación de un conjunto de medios hacia un fin determinado, contendrá componentes instrumentales de naturaleza institucional u orgánica, normativa, financiera y presupuestal, para su realización."



b) El principio de unidad de materia impone que exista una **conexión teleológica** estrecha entre los objetivos, metas y estrategias generales del Plan, y las disposiciones instrumentales que contiene. Esta exigencia de un vínculo estrecho entre los medios y los fines, encuentra fundamento no solo en la necesidad de conferir un contenido preciso a la unidad de materia en el estatuto multitemático como la ley del Plan, sino en el principio de coherencia reconocido en la Ley Orgánica 152 de 1994 al prescribir que los programas y proyectos del plan de desarrollo deben tener una relación efectiva con las estrategias y objetivos establecidos en éste (literal m) del Art. 3º)<sup>4</sup>.

c) La conexión estrecha que exige el principio de unidad de materia entre las metas y propósitos del plan y las disposiciones instrumentales contenidas en la ley, así como el correlativo incremento de la severidad del juicio de constitucionalidad (Corte Constitucional, Sentencia C-016 de 2016).

d) La fijación del contenido del principio de unidad de materia en los anteriores términos se traduce en un control judicial más estricto encaminado a establecer, no cualquier tipo de conexión entre la parte general del Plan con las disposiciones instrumentales que lo componen, sino un vínculo directo<sup>5</sup> y no simplemente eventual o mediato. (Corte Constitucional, Sentencia C-016 de 2016).

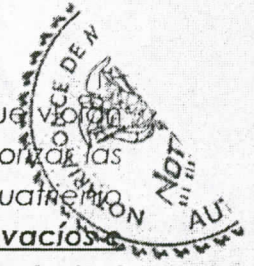
En efecto, la especial posición que en el sistema de fuentes tiene la ley del Plan, así como su particular eficacia normativa, exige asegurar que los mandatos en ella contenidos se relacionen directamente con la función de planeación. Por tanto, no podrá desconocerse que se trata de una ley que tiene la aptitud de aplicarse inmediatamente puesto que sus mandatos constituyen mecanismos idóneos para su ejecución. Esa aplicación prevalente e inmediata debe encontrarse subordinada a que, en realidad, las normas instrumentales persigan de manera inequívoca los propósitos del Plan. Es por lo anterior que el estándar de juzgamiento se hace más riguroso y demanda de la Corte un especial cuidado a efectos de evitar que, al amparo de la naturaleza temáticamente abierta de la ley del Plan Nacional de Desarrollo, en este caso la Ley 1955 de 2019, terminen incorporándose disposiciones extrañas a los propósitos de la planeación.

<sup>4</sup> Vr. Corte Constitucional, Sentencia C-305 de 2004.

<sup>5</sup> El adjetivo "directo" se opone a lo eventual o mediato. Según la jurisprudencia, "aquellas disposiciones de carácter instrumental que no sean inequívocamente efectivas para la realización de los programas y proyectos contenidos en la parte general del plan, o que de manera autónoma no establezcan condiciones suficientes para la materialización de las metas y objetivos trazados en el plan, vulneran el principio de unidad de materia." (Corte Constitucional, Sentencia C-394 de 2012).







Deberá tenerse en cuenta que la jurisprudencia también ha sostenido que violan el artículo 158 "aquellas normas que no tengan como fin planificar y priorizar las acciones públicas y la ejecución del presupuesto público durante un cuatrienio de manera tal que la Ley del Plan no puede ser empleada para llenar los vacíos e inconsistencias que presenten leyes anteriores (...) o para ejercer la potestad legislativa general reconocida al Congreso de la República, sin ninguna relación con los objetivos y metas de la función de planificación" (Corte Constitucional, Sentencia C-394 de 2012, C-573 de 2004, C-795 de 2004, C-376 de 2008 y C-377 de 2008)

Corolario de lo anterior, el artículo 130 de la Ley 1955 de 2019 tiene por objeto crear la contribución especial para laudos arbitrales, por lo que es claro que las disposiciones contenidas en las normas acusadas, no tienen naturaleza instrumental ni se relacionan directamente respecto de los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo. Por tanto, se establece que no existen objetivos, metas, planes o estrategias incorporados en la parte general del Plan Nacional de Desarrollo que puedan relacionarse con la disposición juzgada. Por tanto, el contenido de la norma acusada se puede concluir no tiene relación de conexidad causal, temática, sistemática o teleológica de manera objetiva o razonable con la Ley 1955 de 2019. **De tal suerte que, al no cumplir con ninguno de los requisitos de conexidad que ha establecido la Corte Constitucional como criterio de análisis normativo, y debiendo realizar la Corte un análisis exhaustivo en los términos expuestos previamente, el artículo demandado está llamado a ser declarado inexecutable**, toda vez que vulnera el principio de unidad de materia al ser sus preceptos extraños a la materia que regula la Ley 1955 de 2019.

## II. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

Aparte de los cargos 1 y 3 de la presente demanda, que obedecen a defectos técnicos o procedimentales que conducen inevitablemente a la declaratoria de inconstitucionalidad, nos permitimos aclarar por qué el cargo 2 cumple con los presupuestos establecidos por la Corte Constitucional, entre otros, en la sentencia C-1052 de 2001 del 4 de octubre de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

En tal sentido nos permitimos indicar que los cargos formulados en el numeral 2 son:

a. **Claros**, ya que la normas demandada violan las disposiciones invocadas, así:

**Derecho de acceso a la justicia:** Al imponer una carga adicional a los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, que por sí son onerosos, se está creando una barrera adicional a la posibilidad de acceder a la justicia.

h



Además, el hecho de crear pesos adicionales para estos mecanismos, lo único que se consigue es desincentivar un modelo de justicia que contribuya enormemente a la descongestión judicial.

**Principio de igualdad, equidad, justicia y progresividad:** No se entiende porque el legislador discrimina un modelo de solución de conflictos con otros sí, en últimas, ambos aplican el mismo derecho sustancial y buscan la obtención de unas pretensiones que en su mayoría son económicas. No se tiene una justificación constitucional que permita revelar la razón por la que un mecanismo de justicia debe ser gravado y el otro siendo totalmente violatorio del principio de igualdad y equidad tributaria.

b. **Ciertos**, teniendo en cuenta que del texto del artículo 130 de la Ley 1955 de 2019 demandado, se desprende con claridad que la creación de una contribución especial exclusivamente para los laudos arbitrales de contenido económico genera una situación sumamente desigual e injusta.

c. **Específicos**, pues se basa en considerar inconstitucionalmente aceptable, de acuerdo con las normas invocadas, incorporar una norma que establezca una desigualdad tributaria y una barrera adicional para el acceso a la justicia.

Esta violación se corrige al declarar inconstitucional la norma señalada, con lo cual se reestablece el derecho al acceso a la justicia, principio de igualdad, y equidad, justicia y progresividad.

d. **Pertinentes**, ya que el presente cargo es un argumento de orden Constitucional, fundado en las garantías otorgadas por el artículo 158 de la carta magna.

e. **Suficientes**, teniendo en cuenta que, para su decisión, la Corte Constitucional debe decidir si se justifica, bajo las normas invocadas en este cargo, la incorporación de una norma que contenga una carga donde su único resultado va a ser una desmotivación y desincentivación de los Modelos Alternativos de Solución de Conflictos.

### III. COMPETENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL:

La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente acción de inconstitucionalidad, realizada en contra del artículo 130 de la Ley 1955 de 2019, de acuerdo con el artículo 241 de la Constitución Política, en su numeral 4, según el cual dicho tribunal "[decidirá] sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicio de procedimiento en su formación".

### IV. EXHORTOS:





Amablemente se solicita sean exhortadas las siguientes entidades para que rindan su concepto de rigor y den sus comentarios y opiniones sobre la presente demanda:

- 4.1. Instituto Colombiano de Derecho Procesal
- 4.2. Ministerio de Justicia
- 4.3. Universidad de Los Andes
- 4.4. Universidad Externado de Colombia
- 4.5. Instituto Colombiano de Derecho Tributario -ICDT
- 4.6. Centro de Estudios Tributarios de Antioquia - CETA
- 4.7. Instituto Colombiano de Estudios Fiscales - ICEF

#### **V. PRUEBAS:**

Oficiése al Congreso de la República para que allegue al expediente las Gacetas Oficiales que acrediten que el artículo que crea la contribución especial para laudos arbitrales no fue debatido ni discutido en el primer debate de la ley del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1955 de 2019).

#### **VI. PRINCIPIO PRO-ACTIONE:**

En caso de considerar que la presente demanda adolece de algún requisito formal que dé lugar a considerar su inadmisión, respetuosamente solicito se aplique el principio *pro-actione* para enterarla subsanada.

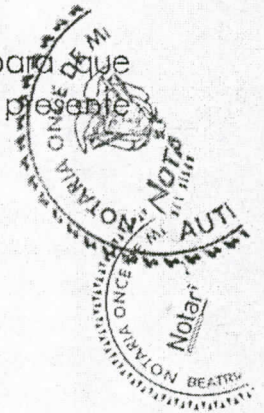
#### **Vii. NOTIFICACIONES:**

Recibimos notificaciones en la sede principal del Centro de Estudios Empresariales Ignacio Sanín Bernal, ubicado en la Calle 5A # 39 - 131 Torre 4 Piso 6 Edificio Corfín, Medellín.

Honorables Magistrados,



**JUAN ESTEBAN SANÍN GÓMEZ**  
Presidente del CEEISB  
C.C. 71.334.897





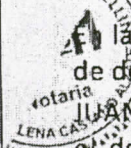


## DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL

Artículo 2.2.6.1.2.4.1 del Decreto 1069 de 2015



7166



En la Ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, el cuatro (04) de junio de dos mil diecinueve (2019), en la Notaría Once (11) del Círculo de Medellín, compareció:

JUAN ESTEBAN SANIN GOMEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía/NUIP #0071334897, presentó el documento dirigido a HONORABLE MAGISTRADOS CORTE CONSTITUCIONAL y manifestó que la firma que aparece en el presente documento es suya y acepta el contenido del mismo como cierto.

*[Firma manuscrita]*



42428nk4gwx1  
04/06/2019 - 12:57:58:961



----- Firma autógrafa -----

Conforme al Artículo 18 del Decreto-Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

*[Firma manuscrita]*



BEATRIZ ELENA CASTAÑO ALZATE  
Notaria once (11) del Círculo de Medellín



Consulte este documento en [www.notariasegura.com.co](http://www.notariasegura.com.co)  
Número Único de Transacción: 42428nk4gwx1